652

DEFENSA

DEL

PROCURADOR JENERAL DE LA NACION

Florentino González,

Hecha ante el Senado de la República en el juicio a que ha dado lugar la acusacion intentada por la Cámara de Representantes, i en que ha llevado su voz como acusador, el Ciudadano diputado José Maria Malo Blanco.

1857.

—~~~~~—

BOGOTA.

—~~~~~—

IMP. DE FRANCISCO TORRES AMAYA.

REPUBLICA

1891

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Excmo. Sr. Ministro

En virtud de lo que me ha sido comunicado por el Sr. Fiscal de la Nación, Sr. D. Juan B. ...

1891

[Faint handwritten signature or text]

BOBOS

IMPRESION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Ciudadanos Senadores.

Cuatro años hace que mi débil voz se dejaba oír en el Senado de mi patria para defender los principios consagrados en la Constitución del 21 de mayo, que dió garantías i derechos a los ciudadanos, i estableció un Gobierno encargado de protegerlos, no de oprimirlos.

Hoy tengo que levantar esa misma voz en defensa de mi conducta pública censurada por la Honorable Cámara de Representantes; i me presento entre vosotros lleno de confianza en vuestra probidad i patriotismo, para sincerarme de los cargos que, por error, se me han hecho; pues no quiero creer que la malevolencia haya tenido parte alguna en ellos.

No tomo asiento con vergüenza en el banco de los acusados, porque no aflige mi conciencia la idea del crimen. Antes levanto confiadamente la cabeza, para demostrar la pureza de mis intenciones, la sinceridad de mis procedimientos, la legalidad de mi conducta, i la imparcialidad i buena fé con que he servido a mi país en el puesto importante a que me llamaron mis conciudadanos; porque, debo decirlo con franqueza, mas bien me considero honrado que degradado por el motivo que ha dado lugar a esta acusación.

La historia nos enseña que, en los países que gozan del beneficio de un Gobierno representativo, los funcionarios públicos son con frecuencia llamados a juicio por haber atropellado los derechos i garantías de los ciudadanos, por haber extendido mas allá de los límites que la constitución les fija el poder que se les habia conferido. Yo soi llamado a responder ante vosotros de mi resistencia a ejecutar actos que creo atentatorios contra los derechos de los ciudadanos, i de mi desobediencia a una autoridad que no tiene facultad legal de darme órdenes. Tal vez, en el concepto de algunos hombres, esta con-

ducta mia es criminal; porque creen que el funcionario público debe tener por oficio sostener lo que se llama derechos del fisco contra los derechos de los ciudadanos, i el Procurador Jeneral en la ocasion presente ha sostenido que el fisco debe respetar los derechos de los particulares. Pero yo no tengo, ni debo tener tales ideas, siendo consecuente con los principios políticos que han servido siempre de norma a mi conducta pública; porque sé que los empleados de una Nacion libre no son los administradores de una entidad distinta de los ciudadanos, que en otras partes se llama Gobierno, sino los custodios fieles de los derechos i garantías que la constitucion i las leyes conceden a los asociados. No puedo creer que, observando esta conducta, haya cometido un delito; antes bien, mi conciencia me dice que he ejecutado un acto meritorio, porque he hecho cuantos esfuerzos estaban a mi alcance para hacer al ministerio público una posicion que lo habilite para llenar con provecho para el pais la alta mision a que está destinado.

Penetrado de estas ideas, entro a responder el cargo que se me hace de haber incurrido en el delito definido en el artículo 570 del Código penal, denegándome a intentar un pleito que la Cámara de Representantes ha creído que debía intentar. Este artículo dice:

«Art. 570. El funcionario u empleado público de cualquiera clase, que siendo requerido *en forma legal* por alguna autoridad lejitima, o advertido *por superior competente*, rehuse o retarde prestar la cooperacion o auxilio que dependa de sus facultades para la administracion de justicia, ejecucion de las leyes, o cualquiera otro servicio público, pagará una multa de cuatro a cincuenta pesos, i será ademas aperebido.»

Esta es la disposicion a que se supone que yo he contravenido, desatendiendo un requerimiento que me hizo la Cámara de Representantes para que intentase ante la Suprema Corte de justicia la demanda correspondiente para que se declarase nulo el contrato de arrendamiento de la salina del Zanjón, hecho entre el Gobierno de la República i el Sr. Carlos Michelsen en febrero de 1853.

Si el Procurador General de la Nacion ha cometido un delito desatendiendo la orden de la Cámara de Representantes, es preciso que se crea que tal orden tenia las condiciones que el artículo 570 del Código penal presupone, para que sea criminal la falta de cumplimiento de ella. Sería, pues, indispensable que el Procurador Jeneral hubiese sido requerido *en forma legal* por autoridad lejitima, o advertido por superior competente para que prestase su cooperacion para la administracion de justicia, ejecucion de las leyes, o cualquiera otro servicio público.

No hai duda ninguna en que la Cámara de Representantes es una autoridad lejitima; mas no por esto sus disposiciones son obligatorias, si están fuera de las facultades que se le han atribuido, o si no son acordadas en la forma que se haya establecido. El capítulo 4.º de la Constitucion de la República determina las facultades de las Cámaras lejislativas, i el 6.º establece el modo de ejercerlas. Ademas de estas disposiciones, existen las de los artículos desde el 337 al 381 del Código de procedimiento eriminal, que arreglan el modo de proceder en los juicios de responsabilidad en que intervienen las Cámaras; i las del artículo 13 del mismo código, que comprenden a todos los

funcionarios públicos. Si la Honorable Cámara de Representantes no ha procedido con arreglo a alguna de las disposiciones citadas al requerirme para que intentase la acción de nulidad del contrato de arrendamiento de la salina del Zanjón, yo no he sido requerido en forma legal, aunque lo haya sido por autoridad legítima, i no he tenido por consiguiente el deber de obedecer. Pero no hai entre las disposiciones citadas ninguna que autorice el requerimiento que se me ha hecho; pues la del artículo 13 del Código de procedimiento criminal, que es la única que la faculta, con todos los demas empleados de la Nación, para que promueva la administracion de justicia, se refiere enteramente a los negocios criminales, i de ninguna manera a los civiles. Su tenor literal es el siguiente.

«Art. 13. Todo empleado público, político, civil, de hacienda, militar o eclesiástico, que en los expedientes, documentos o negocios que maneje, descubra haberse cometido algun *delito o culpa* de aquellos en que debe procederse de oficio pasará, o promoverá que se pase, copia de lo conducente al respectivo agente del ministerio público, o a la autoridad competente, para que proceda al juzgamiento del culpable o culpables, con arreglo a la lei, o procederá por sí mismo, si fuere competente para conocer.»

Servios comparar la orden que me pasó la Honorable Cámara de Representantes en 13 de abril último con los preceptos constitucionales i legales que dejo citados, i hallareis que ninguno de ellos la autoriza. No los capítulos 4.º i 6.º de la Constitucion de la República, porque ellos se refieren a la expedicion de las leyes i a varios actos privativos de las Cámaras respecto de su organizacion i policia interior; no los artículos del Código de procedimiento del 337 al 381, que arreglan el modo de proceder en los juicios en que intervienen; ni el 13 del mismo Código, porque no tratándose en la acción de nulidad del contrato de arrendamiento de la salina del Zanjón de perseguir un delito, sino de una demanda civil, sus disposiciones no le comprenden.

Léjos, pues, de haberseme hecho un requerimiento en la forma legal, se me ha hecho en una forma extralegal, excediendo los límites que la Nación ha puesto a las facultades de los que ejercen el poder público, i dando el funesto ejemplo de una intervencion indebida i arbitraria en negocios que no son de la competencia de los Representantes del pueblo; porque ese mismo pueblo bien terminantemente les ha prohibido, por el artículo 61 de la Constitucion, el ejercicio de toda funcion o autoridad que no les haya expresamente delegado.

Pero tal vez se dirá que la Cámara de Representantes es superior competente para hacer advertencias al Procurador Jeneral, porque así lo ha pretendido la Comision que informó sobre este negocio en la expresada Cámara. Es, pues, preciso examinar si esta ocupa, segun las leyes, en la escala del ministerio público ese punto elevado en que la comision quiere colocarla.

El artículo 1.º de la lei de 30 de mayo de 1855 dice:

Art. 1.º El ministerio público se desempeñará por el Procurador Jeneral de la Nación, *que es su jefe &c.*»

Es, pues, evidente que el Procurador Jeneral es, por la lei, el jefe del ministerio público, i que en el ramo de la administracion que le está enco-

meudado no tiene superior; porque solamente lo es aquel a quien la lei ha atribuido expresamente este carácter.

Si en ciertos casos la Constitución ha facultado a la Cámara de Representantes para que persiga los delitos que puedan cometer los altos funcionarios públicos, atribuyéndole privativamente esta funcion, esa disposicion especial no le dá el carácter de jefe del ministerio público, ni esa categoría en la jerarquia administrativa, que la constituya en superior competente para dar órdenes al Procurador Jeneral.

Yo acato con el mas profundo respeto las Cámaras lejislativas de mi pais, i tengo la conviccion de que la Representacion nacional es el garante mas seguro de las libertades públicas i de los derechos de los ciudadanos. Pero, por la misma razon, quiero que se contengan dentro de los límites que la Nacion ha puesto al ejercicio de sus facultades. Es de esta manera que las rodearán las consideraciones de los granadinos, i que el Cuerpo lejislativo podrá llenar la alta mision que le ha dado el pais, que es la de lejislar, no la de administrar. Por esta razon, reforzada por el deber de conciencia de no prestarme a hacer lo que no creo justo, he arrostrado las censuras acres i apasionadas que han dejado oír en la Cámara de Representantes algunos miembros de ella. Por esta razon, he preferido que se me traiga al banco de los acusados en el Senado de mi patria, antes que autorizar con mi sumision un exceso de facultades, detras del cual podrian venir otros excesos; porque una vez rotos los diques que deben contenerlos, no hai término dentro del cual se puedan detener.

No es sin fundamento que la Constitucion de la Nueva Granada no dá a las Cámaras atribuciones administrativas, i limita su poder a la facultad de hacer leyes. Para administrar la cosa pública se necesita entrar en los pormenores de los negocios, tocar con las personas, ofender muchas veces sus intereses i sus pasiones; i es preciso que esa funcion esté encomendada a empleados que tengan una pauta a qué arreglarse i conforme a la cual deban proceder, a empleados responsables, que, sino por el sentimiento del deber, sí por el del temor, respeten los derechos de los ciudadanos, i manejen con pureza los intereses puestos a su cargo. Pero atribuir a un cuerpo numeroso, compuesto de individuos irresponsables, facultades administrativas, seria abrir el camino para fundar el mas temible despotismo, que es el de las asambleas deliberantes, cuando no solamente lejislan, sino que administran los negocios de un pais.

La historia nos presenta ejemplos de estas verdades, que no debemos olvidar, i que yo tengo siempre en mi memoria. La Convencion francesa, tomando a su cargo la administracion de los negocios del pais, pasó sucesivamente desde las órdenes de confiscacion de los bienes de los emigrados, hasta las listas de proscripcion que la Comision de Salud Pública pasaba diariamente al Procurador Fouquier Thinville para que llevase a efecto ese degüello pavoroso que duró hasta el 9 de thermidor. Así tiene que suceder siempre; porque en donde muchos hombres están reunidos con un poder inmenso i sin responsabilidad, muchas pasiones se desencadenan, pues que no tienen diques que respetar.

Celebro que se haya presentado esta ocasion de pensar una vez mas

en este importante negocio; porque nos encontramos en una época de reformas, en la cual conviene tener presentes los principios salvadores de las sociedades, i preceverse de los errores que tantas desgracias han causado a la humanidad. Por esta razon, léjos de sentir el que se me haya traído a responder de mi conducta ante el Senado, lo celebro mui cordialmente; pues se llama la atencion a una cuestion de trascendentes consecuencias en el porvenir; buenas, si queda consagrado el principio de la no intervencion de las asambleas deliberantes en negocios administrativos; pésimas, si se adopta el error contrario.

No hai necesidad, en ningun caso, de que una asamblea deliberante tenga la facultad de mezclarse en promover la administracion de justicia, i si hai gravísimos inconvenientes en que así suceda.

Desde que se autorice el abuso de que la Cámara de Representantes pueda dar órdenes a un agente del ministerio público para que promueva una accion civil ante los Tribunales, manifestando que cree nulo o perjudicial un contrato, el ánimo de los jueces quedaria prevenido para decidir de acuerdo con las indicaciones de la Camara; porque siendo ella la que habia de fiscalizar la conducta del juez, i habiendo prejuzgado la cuestion, difícil seria que preocupado de esta manera pronunciase un juicio imparcial.

Yo sé que hai muchos hombres idolatras de la omnipotencia de las asambleas deliberantes para quienes estas ideas pueden no ser aceptables; pero esto no me arredra para defenderlas, porque tengo en apoyo de ellas la historia de los Gobiernos parlamentarios, i la opinion de los mas sensatos publicistas.

Las disposiciones prácticas que rijen en nuestro pais están felizmente de acuerdo con estas ideas; pues, como lo he demostrado al principio, la Cámara de Representantes no tiene por la Constitucion, ni por la lei, atribucion para requerirme para que entable un pleito civil, ni es superior mio *competente*, para que pueda hacerme las advertencias a que alude el Código penal.

Aquí podría yo terminar este escrito, porque lo que acabo de exponer es bastante para demostrar que no he cometido el delito definido en el artículo 570 del Código penal, que es el único cargo por el cual se ha admitido la acusacion.

Pero deseo que el Senado de mi patria se halle al cabo de las razones que han obrado en mi ánimo para no proceder de la manera en que la Cámara de Representantes creia que debia hacerlo.

Sin excitacion de ninguna autoridad, ni sujestion de algun particular, yo examiné todos los contratos sobre arrendamientos de salinas i elaboracion de ellas, desde los primeros dias en que entré a ejercer las funciones de Procurador Jeneral.

Posteriormente los examiné con mas cuidado, porque la prensa llamó la atencion pública sobre ellos; i desde entónces fijé mi consideracion sobre dos puntos: 1.º Sobre la facultad que el Poder Ejecutivo hubiera tenido para celebrarlos; 2.º Sobre el cumplimiento que los arrendatarios hubieran dado a sus estipulaciones.

Acerca del primer punto, hallé que el Gobierno habia dado en arrenda-

miento varias salinas, como las del Zanjón, Sesquilé, Sobachoque, Gachetá, Sisguasá i Sismosá a diferentes personas, por ser de aquellas en que no estaba montada la elaboracion o explotacion de manera que ofreciesen facilidades para administrarlas. Este hecho, que es el que exige la lei para que el Poder Ejecutivo pueda dar salinas en arrendamiento, existia respecto de todas las que fueron arrendadas, i solamente fué disputado respecto de la salina del Zanjón, no porque dejase de reconocerse que allí no habia elaboracion montada, sino porque se pretendia que aquella mina debe considerarse como la misma que el Gobierno administra en Cipaquirá. Parece, pues, que se conyenia implícitamente en que el Gobierno habia sido hábil para dar en arrendamiento las demas salinas, supuesto que las observaciones que se hacian tenian por objeto solamente la del Zanjón. Era, por tanto, de mi deber examinar con mayor cuidado este negocio, para saber si habia necesidad de que en él interviniese el ministerio público. Traje a la vista todos los documentos relacionados con él, i examiné las disposiciones legales concernientes, i en vista de todo adquirí la conviccion de que el contrato no podia ser atacado como nulo, por las razones que me permitireis exponer, fundadas en las leyes.

Dicen estas que son nulas las obligaciones que se estipulan en los contratos: 1.º por razon de la cosa que hace su objeto, cuando se estipula dar una cosa imposible, o que no existe, o de aquellas que no pueden estar en el comercio de los hombres: 2.º por razon de las personus, cuando los que contraen no tienen capacidad para obligarse, como el loco, el menor, el hijo de familia i otros: 3.º por falta de consentimiento de los que se han puesto de acuerdo sobre la cosa i el tiempo del pago, cuando se hace bajo una condicion imposible, o por error, violencia, ó dolo: 4.º por defecto en la forma, cuando debiendo extenderse en escritura pública solamente se constituye por documento simple: 5.º por ser ilícita i contraria a las buenas costumbres la causa por la cual se contrae, como si se prometière dar dinero porque se cometa un homicidio, o se ejecute cualquier acto criminal: 6.º por haberse contraido la obligacion por causa falsa o por motivo que no existe realmente.

No encuentro que ninguna de estas causas de nulidad de las obligaciones, que son las únicas que mencionan las leyes del título 41 de la Partida 5.ª, afecten el contrato de arrendamiento de la salina del Zanjón; porque es indudable que el Poder Ejecutivo pudo darla en arrendamiento, hecer practicar las diligencias que creyó convenientes para cerciorarse de que no estaba montada en ella la elaboracion, i variar sus disposiciones sobre el particular mandando que un comisionado especial hiciese el reconocimiento que ántes habia encargado a los Gobernadores. El contrato se ha hecho, por tanto, por persona hábil, i se extendió en la forma en que debe estar extendido para que sea obligatorio. Si el Encargado del Poder Ejecutivo, como personero de la República, omitió practicar algunas diligencias que tuvieran tendencia a hacer un contrato mas ventajoso, si aquel funcionario ha faltado a un deber que debió cumplir, estas circunstancias afectarán la responsabilidad del empleado, mas no su acto; ni lo invalidan, sino hai alguna de las causas que las leyes indican como motivos para anularlo. Esta doctrina está

de acuerdo con las leyes españolas en vigor, i con las recientes de la República.

Cuando una obligacion en favor del Tesoro público debe garantizarse con fianza, si esta no se presta o es insuficiente, no por eso es nula la obligacion. El artículo 484 del Código penal castiga al funcionario que así la aprobare, pero ninguna lei la invalida.

Esto es, i debe ser así; porque es necesario que los particulares no vengan en ningun caso a ser víctimas del modo como los funcionarios públicos ejerzan el poder que se les ha conferido, si aquellos por su parte han llenado las condiciones que se les exigen. Es preciso que el individuo llamado a contratar con el Gobierno del pais en que vive, pueda contar con que ese Gobierno le saneará las cosas que le dé en venta o arrendamiento, en vez de suscitarle pleitos para no cumplirle lo que le haya prometido.

Fué en el mes de febrero de 1853 que se hizo el arrendamiento de la salina del Zanjón. Los empleados que, representando la Nacion, hicieron en nombre de ella el contrato, los que les han sucedido en el poder, i los que han ejercido el ministerio público ántes que yo, no han creído que el contrato adoleciese de ninguna nulidad; ántes bien todos ellos han convenido en que siga observándose. La única duda que se habia suscitado acerca de él, quedó resuelta en 15 de abril de 1856, bajo la firma del Secretario de Hacienda señor Núñez, como puede verse en la *Gaceta Oficial* número 1,954.

Mi creencia de que el contrato no podia ser atacado como nulo está, pues, apoyada por la opinion de muchos funcionarios públicos, respetables por su posicion i su saber, i por razones legales de gran peso; no es el fruto de un capricho sin fundamento, ni de condescendencias inspiradas por simpatías personales, como se ha atrevido a insinuarlo mi acusador.

Tengo la conviccion de que no es nulo el contrato; i esta conviccion está fundada, no solamente en las razones que pueden alegarse en favor de su legalidad, sino tambien en la opinion de mis cólegas en la administracion, i de los que nos han precedido.

Porque ellos han tenido esa misma conviccion, i por acceder a las reiteradas instancias del arrendatario de la salina del Zanjón para que se rescindiese el contrato hecho con él, fué que el Poder Ejecutivo dispuso que se entrase en un arreglo para terminar por medio de una transacion este negocio, sin faltar a la fé pública empañada, ni comprometer el crédito del Gobierno. Las solicitudes del contratista relativas a este negocio, i las diferentes resoluciones dictadas sobre ellas, están impresas en un *Alcance a la Gaceta Oficial* número 2,113.

El negocio se halla en estado de hacer una transacion, que es el medio decoroso que el Poder Ejecutivo ha creído deber adoptar para ponerle término.

En tales circunstancias, aun cuando yo no tuviese la conviccion de que el contrato no adolece de nulidad, no creo que pudiera serme permitido entablar una demanda para anularlo, atropellando i rompiendo una nego-

ciacion que debo considerar pendiente entre las partes, supuesto que no se ha revocado la resolucion que la autorizó.

He procedido en esto de acuerdo con mi conciencia, i creo que, léjos de faltar con mi conducta a un deber, he llenado uno de los mas importantes del ministerio público.

No puede negárseme la facultad de apreciar los hechos ántes de promover alguna accion sobre ellos. Es teniendo esta facultad que los que ejercen el ministerio público pueden servir útilmente a la Nacion. Nada ganaria esta con que el Procurador Jeneral propusiera una demanda que no habia de sostener con interes i empeño, como sucederia en el caso de que procediese sin conviccion; porque la República, léjos de ser defendida ante los Tribunales, hallaria en el ministerio público un cooperador de la parte contraria.

La Constitucion autoriza al Poder Ejecutivo para que acuse a los Gobernadores i a otros funcionarios públicos por medio de un fiscal que nombre al efecto, cuando el Procurador Jeneral rehuse hacerlo. Ella consagra el principio de que debe respetarse la conciencia de este empleado; porque desde que presupone que puede no condescender con los deseos del Poder Ejecutivo le dá el derecho de no hacerlo.

En todos los paises que tienen Gobierno representativo, se tiene en cuenta la opinion del Procurador Jeneral para saber si un negocio debe, o no, llevarse ante los Tribunales. Así se practica en Inglaterra i los Estados Unidos, aunque el Procurador Jeneral no tiene la posicion independiente que ocupa en la Nueva Granada; pues en aquellos paises es nombrado por el Gobierno, i no designado por eleccion popular. En aquellas naciones, es verdad, el Gobierno puede servirse de otras personas, que designe al efecto, para promover las acciones que el Procurador Jeneral no crea conveniente entablar. Pero esto prueba que se reconoce la necesidad i la justicia de salvar la conciencia de aquel empleado, i la inutilidad de ocuparlo en un servicio que no puede prestar con la eficacia que inspira la conviccion.

Es verdad que en la Nueva Granada no hai una disposicion que indique el partido que el Gobierno debe adoptar para seguir un pleito civil, cuando los empleades del ministerio público rehusen hacerlo. Pero esto querrá decir, que el Congreso debe llenar ese vacío de nuestra legislación, no que deba torturar a un ciudadano que ejerce el ministerio público, obligándolo a sostener lo que cree irracional e injusto.

Yo no pretendo por esto, que los que ejercen el ministerio público no son responsables. Léjos de mí semejante idea. Ellos deben serlo siempre que dejen de hacer lo que cumple a sus funciones para averiguar los delitos i promover su castigo, en todos los casos en que la lei expresamente les manda hacerlo. Así es que, si habiéndoseles denunciado un homicidio, un robo, un delito cualquiera, e indicándoseles los testigos que pudieran declarar sobre su perpetracion, no promoviesen que se les examinara; si dejasen de emitir su opinion, dentro de los términos legales, en los negocios de que se les dé vista; si por interes personal dejasen de intervenir en los que debe oírse su voz, i en otros casos de igual naturaleza, no hai duda ninguna de que incurren en un delito. Pero si no acusan a una persona porque no la creen delincuente,

si no sostienen una demanda civil porque no hallan razon, i no la llevan adelante, manifestando que la creen injusta, no sé yo que le haya ocurrido a nadie en ningun pais hacerlos responsables; porque esto seria castigar los sentimientos de probidad, i convertir al ministerio público en un instrumento ciego para perseguir, bajo las fórmulas sagradas de la justicia, a todos los ciudadanos que se le indicasen como criminales, i para atropellar sus propiedades.

No puedo suponer, ni por un momento, que el Senado de mi patria quisiese para ella un ministerio público cuyo personal se compusiese de hombres que abdicasen su conciencia, para perseguir siempre que se les indicase una víctima a quien sacrificar como un criminal, o una propiedad que obtener para el fisco a todo trance. No; yo creo que, por el contrario, los Senadores granadinos desean que los hombres que en nuestro pais ejerzan el ministerio público, si son activos i eficaces para perseguir a los criminales cuando hallen pruebas suficientes de que lo son, i para proteger los intereses del fisco cuando puedan demandarlos con justicia, pidan con franqueza i buena fé la absolucion de los acusados si se justifican, i convengan en que las cuestiones sobre intereses se decidan en favor del que tenga derecho a ellos. De otra manera, los empleados del ministerio público, serian los precursores del verdugo como Fouquier Thinville, o los viles agentes de la expoliacion.

Hai verdades tan obvias, que implícitamente son reconocidas por los mismos que establecen una doctrina contraria a ellas.

Mi acusador, escediéndose de los límites que parecia señalarle la proposicion aprobada en la Cámara de Representantes, ha hecho una pesquisa de toda mi conducta pública; i me hace acriminaciones porque he acusado Gobernadores que habian ejecutado leyes que no creia vijentes; porque he pedido la absolucion de otros a quienes habia acusado como grandes criminales; i porque he solicitado la anulacion de actos de los Gobiernos municipales que no creía conformes con las leyes. Yo siento que el Honorable Representante a quien se ha hecho el encargo de sostener esta acusacion, haya prohibido esas inculpaciones que el espíritu de partido me ha lanzado en los escritos públicos; porque veo con pesar que él no ha podido hacerse superior a los ódios de los bandos, i a las acriminaciones sugeridas por los resentimientos políticos. Pero bajo otro aspecto celebro que se haya espresado en esos términos; porque su escrito confirma de la manera mas perentoria las verdades que acabo de enunciar. ¿Por qué me hace inculpaciones por haber acusado en ciertos i determinados casos? Por que reconoce que tenia el derecho de abstenerme de acusar. ¿Por qué estraña que haya pedido la anulacion de ordenanzas que él cree conformes con las leyes? Indudablemente porque piensa que pude no hacerlo. Siendo esto así, ¿cómo desconocer el derecho que un empleado del ministerio público tenga para apreciar los hechos, ántes de proponer una acusacion o una demanda, i de denegarse a hacerlo si no las cree justas?

Yo no puedo explicar el contrasentido que envuelve ese episodio de la acusacion, sino por la ceguedad lamentable que ofusca a los hombres públicos cuando dan oídos a la vocinglería de la malevolencia i la toman por el clamor de la sana opinion pública.

Quiérese por algunos que a todo trance se intente un pleito para anular un contrato de que se cree que un particular saca grande utilidad; quiérese

que ese contratista pierda lo que ha gastado en mejorar una propiedad nacional; preténdese que hai razon para todo esto, aunque estén de por medio la fé pública, la reputacion de los altos empleados que intervinieron en este negocio en nombre de la Nacion; i se levanta una vocinglería malevolente, que eñcitan con calor la envidia de unos, i los intereses de otros que, tal vez, tienen miras futuras que no podrian realizar permaneciendo las cosas como están. Parece que hai muchos hombres para quienes estas son razones para que el Procurador Jeneral ocurra a la Suprema Corte de la Nacion a pedir i obtener la anulacion de un contrato; que prescinda de lo que le dice su conciencia, i que sustituya esta con lo que quieren llamar la voz pública.

Pues bien! Yo no soi de esos hombres, que están espiando la opinion de otros, para obrar con arreglo a sus sujestiones porque esto les dá popularidad; yo no obedezco a las inspiraciones de ningun partido; yo me recojo dentro de mi conciencia para apreciar los hechos i decidir sobre ellos, sin preocuparme de las personas interesadas, ni del placer o disgusto que mis juicios causen a los bandos. Sé mui bien que por esto no soi popular entre ellos; porque los partidos solamente gustan de los hombres que les sirven de instrumentos para perseguir i sacrificar a sus contrarios. Sé que se me tacha de que no me atengo sino a mí mismo; porque los que no tienen firmeza, conciencia, ni convicciones, no pueden tolerar a un hombre desemejante a ellos, pues ofende la igualdad; aunque en los dias de crisis les agradan mucho esas cualidades que censuran, porque solamente ellas pueden dar la firmeza que se necesita para defender los principios i salvar con ellos las sociedades, comprometidas muchas veces en su existencia por la debilidad o la violencia de los que las gobiernan obedeciendo a las sujestiones de los partidos.

Sí, Ciudadanos Senadores; yo no soi de esos hombres cuya vida pública se alimenta de la popularidad, i el dia que terminan su existencia solamente dejan detras de sí el recuerdo de los desaciertos en que incurrieron por sus condescendencias criminales con los partidos, o con la opinion extraviada. Al contrario, soi de los que creen que el principal i mas importante deber de un ciudadano que ocupa un puesto público, es hacer frente a los errores de la opinion i rechazar las sujestiones apasionadas, teniendo el valor civil necesario para obrar en contra de unos i otras, si en conciencia no las halla conformes a la justicia i a la conveniencia nacional.

Al denegarme a entablar un pleito que otros creen justo; al arrostrar con este motivo la animadversion de todos aquellos que elaman porque se anule un contrato, he llenado un deber mui importante; i creo haber hecho un servicio a mi pais, porque he contribuido a que los ciudadanos tengan confianza en los hombres públicos, viendo en ellos los instrumentos de la justicia i los protectores de sus derechos, no los ajentes de la malevolencia de algunos particulares, o de los odios de los partidos. Por mi conducta he merecido un público testimonio de aprobacion de parte del distinguido Ciudadano que hoi está a la cabeza de la República, el dia en que se encargó de la Presidencia de ella; i muchos de los hombres a quienes la Suprema Corte de Justicia ha llamado a responder de sus hechos, i por cuya absolucion he abogado despues de que he oído sus descargos, han confesado mi imparcialidad. No pueden, pues, afectarme las inculpaciones de parcialidad que se ha servido

hacerme el Ciudadano Representante encargado de sostener la acusacion.

El mismo Ciudadano Representante ha hecho con particularidad, i con énfasis, alusion a un cargo que, aunque no es objeto de este juicio, no debo pasar en silencio. Hablo de la omision en perseguir al ciudadano Luis Réves Soler, a quien se cree criminal, por su conducta como Tesorero jeneral, por haber cobrado del Tesoro público una suma de 25,124 pesos.

El Poder Ejecutivo me dió conocimiento de este negocio, i al momento pedí a la Secretaria de Hacienda los documentos que en tal caso se necesitaban para intentar el juicio de responsabilidad. La Secretaria de Hacienda nunca me remitió esos documentos, i ántes bien, en el mes de marzo último, me exijió que le devolviese los pocos que al principio me habia remitido. No comprendo cómo el Ciudadano Representante mi acusador, a quien le ha parecido una lijereza el que yo haya intentado acusaciones con sumarios que la Suprema Corte ha creído suficientes para declarar con lugar la formacion de causa a varios empleados, ha podido pretender que a tontas i a locas promoviese yo el enjuiciamiento del Sr. Luis Réves Soler. ¿Es que a unas personas si se les puede encausar sin pruebas, i a otras se les debe dejar impunes aun cuando haya constancia de sus delitos? Yo no puedo prestarme a estas inconsecuencias.

La prensa que se llama liberal ha creído tambien conveniente censurar mi conducta para coadyuvar la acusacion, en artículos llenos de contrasentidos i contradicciones; pero esta no es la ocasion de rechazar sus indignos ataques. Sus autores serán castigados por sus mismos extravios, i su ingrata correspondencia a los servicios que he hecho a la causa de la verdadera libertad, no será un motivo para que yo deje de trabajar por su completo triunfo en mi pais; pues esa alma, que se recoge dentro de si misma para pensar i resolver sobre la conducta que debe seguir, sin acordarse de las injurias i animosidades, i que por esto no es del agrado de los partidos, tiene bastante jenerosidad para perdonarlo todo, i suficiente abnegacion para sacrificarse por el bien de sus semejantes.

Perdonad, Ciudadanos Senadores, que haya cansado vuestra paciencia ocupandoos tanto tiempo de mi persona. Pero he sido acusado como un criminal, i he debido demostrar que soi inocente; se ha desfigurado mi conducta, i ha sido necesario presentarsela tal como es; se ha pretendido que he desempeñado mal mis funciones, i ha sido indispensable hacer ver que son mis acusadores, i no yo, quienes han andado fuera del camino legal. Yo habria guardado ese mismo silencio con que he sufrido impasible los ataques de la calumnia i la malevolencia durante tanto tiempo; pero se me ha forzado a levantar al fin la voz para defenderme, i lo he hecho. Mis acusadores lo han querido; cúmplase su deseo. El mio no es el de un triunfo personal; es el del triunfo de un principio, la fundacion de un precedente que será de mui útiles resultados en el porvenir, si, como lo espero, consagra la competencia del ministerio público para apreciar las circunstancias en que debe hacer oír su voz ante los Tribunales, i la no injerencia de las Cámaras Lejislativas en negocios puramente administrativos.

Ahora, Ciudadanos Senadores, fallad según vuestra conciencia, pesando las razones que he expuesto en mi defensa. Yo no invoco vuestra indulgencia porque no creo necesitarla. Solamente apelo a vuestra justicia; que ella me absuelva si soi inocente, como creo serlo; si no lo fuere, que caiga sobre mí el castigo a que me haya hecho acreedor. Servios tan solo tener bien presente que tan perniciosos son los resultados de un fallo injusto, como útiles las consecuencias de una sentencia conforme con la justicia.

Honorables Senadores,

Florentino González.